

HOMENAJE A JOSÉ SAID

José Joaquín Said Saffie

FECHA NACIMIENTO. 17 DE ABRIL DE 1930

FECHA DEFUNCION. 23 DE JULIO DE 2020

Pocas veces tengo la oportunidad de rendir homenaje a una persona que se lo merezca tanto como don José Said Saffie a quien tuve el honor de conocer personalmente y a quien, siento el orgullo de haber llamado...un amigo.

El homenaje que hoy rinde este Senado, reconoce no solo al empresario, que en sí es digno de reconocimiento, sino que viene en destacar a un humanista, a un hombre que ajeno a los egos que abundan en las altas esferas, era de una humildad proverbial y de un claro propósito en el sentido ético del trabajo, lo que él llamaba las 4 P: PASION, PERSEVERANCIA, PACIENCIA Y PRUDENCIA.

Don José Said era un hombre extraordinario, un hombre que será recordado como un gran empresario, un destacado miembro de la comunidad palestina, un filántropo, pero sobre todo, un gran hermano, un excelente padre, un hermano cariñoso y una mejor persona.

Aunque nació en Arequipa, ya a los 5 años echo raíces en nuestro país, siguiendo a la familia que buscaba mejores expectativas en nuestro país. Una persona que se sentía otro chileno, dispuesto a colaborar con las causas solidarias que fueran necesarias, inefable contador de historias y de un buen humor que hacía de cada momento una oportunidad.

Un hombre con profundas convicciones católicas, vinculado con los jesuitas; pero que no olvidó en ningún momento sus raíces palestinas y trató desde la distancia de mejorar la vida de los miles de palestinos que no tuvieron la suerte o las oportunidades que la vida le brindó y que él supo aprovechar.

Un padre cariñoso con sus 4 hijos: Salvador, Isabel, Constanza y Loreto y devoto esposo de Isabel, a quienes transmitió su visión y pasión por la vida, el trabajo honesto y la importancia de la filantropía.

Extrañamos al empresario, como no, al banquero; pero extrañamos mucho más a la persona, al amigo siempre dispuesto al buen consejo, al filántropo que colaboró de manera desinteresada en campañas y organizaciones como la Fundación Belen Palestina 2000 que lleva 20 años ayudando a mejorar las condiciones de los niños palestinos, iniciada en su viaje al Jubileo del año 2000 con el Papa Juan Pablo Segundo.

Tuvo un gran corazón palestino y un gran corazón católico”, como lo define Maurice Khamis, presidente de la comunidad Palestina, palabras que reflejan al hombre que conocí, respeté y aprecié profundamente.

El homenaje que rinde este Senado a una destacada personalidad es más que merecido; y aprovecho de saludar a su familia, en especial a Salvador, su hijo, con quien me une una profunda amistad.

Necesitamos más personas como don José, necesitamos más gente con esa visión de la empresa, de las personas y de la vida.

Que estas breves palabras sirvan para recordar a una gran hombre, que hizo diferencia entre los que lo conocieron y entre aquellos que fueron objeto de su generosidad, muchas veces, de manera anónima.

MINUTA INTERVENCIÓN PROYECTO DE CAMBIO DE APELLIDOS (Boletín 3810-18)

Votación en general

Señora Presidenta:

Este proyecto nace como una moción parlamentaria de mi autoría junto al ex diputado Felipe Salaberry y el apoyo de varios otros diputados, refundido con proyectos de varios otros diputados de la oposición.

En principio, el proyecto solo buscaba darle la posibilidad a los padres para que al momento de inscribir el nacimiento de sus hijos en el Registro civil, de común acuerdo, pudieran alterar el orden de los apellidos en su inscripción registral. Tal posibilidad ya se otorga en legislaciones europeas como la francesa.

Producto de la unión de varios proyectos, el contenido se ha ampliado a diversas hipótesis, por ejemplo, incorpora la posibilidad que las personas adultas, administrativamente puedan cambiar el orden de los apellidos o establecer un apellido compuesto o solo el apellido de quien se ha obtenido la filiación

También establece que en todas las normas legales donde dice Apellido paterno y apellido materno se cambie a simplemente “apellidos”.

Finalmente, permite en una norma transitoria, que los padres con hijos ya inscritos puedan, dentro del plazo de un año, concurrir al Registro Civil y cambiar el orden los apellidos de los hijos. La norma autoriza a los hijos mayores de 14 años oponerse a este cambio basado en el principio del interés superior del niño.

En la actualidad, existe un procedimiento civil voluntario que permite el cambio de nombres o apellidos, pero con causales específicas como son que el nombre y el apellido cause humillación o sea denigrante o que la persona sea conocida en la vida civil con otro nombre por, al menos 5 años; pero es un procedimiento largo y oneroso.

Han pasado 15 años desde que presentamos este proyecto, y aún seguimos construyendo igualdad entre hombres y mujeres. Hoy más que nunca, queremos contribuir a la libertad y la dignidad de las personas; queremos darle a los hijos que quieren homenajear a sus madres que han luchado solas para criarlos, la posibilidad de poner el apellido materno en primer lugar.

Obviamente, el proyecto es perfectible, como lo menciona la profesora Rommy Ugarte y por lo mismo, se debe dar coherencia a las normas para que sean un aporte real y sistémico a la igualdad.

Han pasado 15 años desde el ingreso del proyecto a tramitación; es un buen momento para avanzar; dejar las palabras vacías y construir libertad, dignidad e igualdad

Apruebo la idea de legislar. He dicho, señora Presidenta.

MINUTA PROYECTO AMPLIACION MEDIDAS DE PROTECCION DEL EMPLEO

Primer trámite constitucional

Señora Presidenta:

La pandemia no da tregua. La región de Los Lagos ha sido una de las zonas más afectadas. Actualmente la mayor parte de las comunas de nuestra Región se encuentra en cuarentena o transición y así se ha dado de manera más o menos permanente desde hace meses.

La industria gastronómica y la turística, están en el suelo. El tiro de gracia fue la llegada de la segunda Ola, sin que se hayan superado los efectos de la primera.

No hay presupuesto familiar que resista tantas restricciones por un plazo tan extendido. Los comerciantes y Pymes de Osorno, Puerto Montt, Chiloé, Llanquihue y Palena están con el agua al cuello.

Por ello, Las ayudas del gobierno son tan relevantes, aunque insuficientes. No podemos seguir retirando desde los fondos previsionales. Lo que en su momento fue solución para millones de chilenos, hoy solo sería remedio para algunos miles.

En ese contexto se vuelve relevante que las ayudas continúen. El proyecto busca permitir que el ejecutivo pueda mediante decreto extender las normas de suspensión del contrato de trabajo hasta el 6 de diciembre de 2021; Permitir hasta un máximo de 9 giros adicionales con cargo al FCS para trabajadores suspendidos que hayan agotado sus giros anteriores; Extender la vigencia de la Ley N° 21.263 y Extender hasta enero de 2022 el plazo para que la Superintendencia de Pensiones y DIPRES emitan el informe para determinar eventual derecho a retribución adicional de la AFC.

Pero ello no es, ni va a ser suficiente. Si la pandemia se extiende las ayudas no solo deben mantenerse sino que aumentarse. Lo he dicho desde hace tiempo, por mucho que les duela a los economistas; si hay que endeudarse hay que hacerlo. Los chilenos ya se gastaron el 20% de sus ahorros de AFP y, en especial, los sectores más vulnerables, han usado todo el escaso ahorro que tenían y las redes de apoyo también están agotadas.

Apoyo este proyecto con decisión porque permite mantener los flujos de ayuda; pero de mantenerse las malas cifras de la pandemia o demora la llegada de vacuna; desde ya advierto que estos montos no serán suficientes para la Región de Los Lagos.

He dicho Señora Presidenta.

MINUTA DE INTERVENCIÓN PROYECTO QUE MODIFICA LEY ZAMUDIO (BOLETIN 12748-17)

DISCUSIÓN EN GENERAL

SEÑORA PRESIDENTA:

La ley 20.609, también conocida como Ley Zamudio significó una nueva etapa en el ámbito de la lucha contra la discriminación.

En un tema relevante, pero que involucra múltiples sensibilidades, los alcances de la ley deben ser estudiados con mucha precaución.

Este proyecto en principio nace como una manera de mejorar el procedimiento civil establecido en la ley, que era una adaptación al procedimiento civil del Recurso de protección, con todas las falencias y debilidades que vienen de una adaptación como esa.

Los autores del proyecto señalaban como causal el poco uso del mecanismo judicial y los pocos resultados de su aplicación práctica.

Aunque fue autorizado que se viera en general y particular por ser proyecto de artículo único, lo cierto es que a través de sus discusiones en la comisión de DDHH, de la que formo parte, el proyecto se expandió vía indicaciones, a una modificación total no solo a la ley 20.609, sino que incluyó normas del Código Procesal penal entre otras.

Si bien la idea es relevante, las modificaciones realizadas por la comisión representan un giro drástico y que puede tener efectos muy negativos. Por lo mismo, tenemos varias reservas respecto a su actual texto. Enumero algunas solo a modo ejemplar y no exhaustivo:

- 1) El aumento de categorías sospechosas para incluir conceptos difusos como la condición social
- 2) La creación de categorías autónomas de discriminación donde antes existía una categoría con requisitos copulativos
- 3) La incorporación de distintos tipos de discriminación, no solo la directa, sino que también la indirecta, la colectiva y la aún más difusa “discriminación estructural” de alcances indeterminados y que conlleva riesgos de derogar o servir de base la derogación tácita de otras normas legales.
- 4) Se eliminan la posibilidad de excepcionarse por aplicación de normas de rango constitucional.
- 5) Se establece la existencia de discriminación arbitraria no solo habiendo intención de producirla, sino que bastando que el resultado origine esa discriminación
- 6) Se permite la posibilidad de solicitar indemnización de perjuicios en el mismo procedimiento, lo que en sí no es una mala noticia, sin embargo, se establece a priori un monto mínimo, sin atender a las circunstancias de cada caso.
- 7) En el plano procedimental, se incorpora un mecanismo propio del procedimiento de tutela laboral que implica que de haber “indicios de existencia de discriminación arbitraria” según los antecedentes aportados por la parte demandante, será de carga del demandado acreditar que tal

hecho nos es discriminatorio, lo que van en contra de varios principios básicos del procedimiento civil, como lo es la igualdad de las partes.

8) El proyecto elimina la multa que sufría el denunciante cuando se establecía que su acción carecía completamente de fundamento.

9) Se autoriza que personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro puedan tener legitimación activa en casos de discriminación colectiva o estructural, lo que puede dar lugar situaciones indeseadas.

El proyecto, en síntesis, abarca mucho más de lo que aparece a primera vista. Requiere un estudio mucho más profundo respecto de sus alcances y ha superado con largueza lo planteado por los senadores autores de la moción al justificar su proyecto. Tenemos muchas prevenciones, que hicimos ver en la comisión, sin ningún éxito.

Todos queremos mejorar la forma en que, como sociedad, enfrentamos las discriminaciones que a diario sufren miles de personas en nuestro país. Sin embargo, algunas de estas modificaciones siguen un curso que me parece peligroso porque se puede usar no solo para defender víctimas de discriminación arbitraria, sino que para perseguir y acallar ideas, credos o manifestaciones religiosas.

Entiendo muy bien el sentido del proyecto, pero en las cuales circunstancias y después de ver la evolución que ha tenido en la comisión, no puedo más que abstenerme.

He dicho, señora presidenta

MINUTA INTERVENCION PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

INFORME DE COMISIÓN MIXTA

SEÑORA PRESIDENTA:

En la urgencia social y sanitaria, podemos olvidar que el mundo sigue girando y que los problemas que eran urgentes para el mundo el 2018, lo siguen siendo en el 2021, con pandemia, y, con mayor razón, después de ella.

El cambio climático es una realidad difícilmente desmentible: La sequia que afecta a gran parte de nuestro país es solo un síntoma; pero que retrata de manera gráfica las graves alteraciones que sufre el clima mundial y como consecuencia, el medio ambiente. La región de Los Lagos no está al margen de esta realidad, el déficit de lluvias afecta a toda la región y especialmente a Chiloé por la tala indiscriminada de las turberas, que acumulan el agua que requiere el hábitat de la Isla Grande.

Los factores que han ocasionado el cambio climático y el grado de ponderación están en discusión; pero es claro que la Acción humana ha tenido efectos negativos al aumentar el efecto invernadero.

Por lo mismo, debemos aceptar los DOS siguientes hechos: No podemos seguir produciendo de la misma manera y no podemos usar las mismas fuentes de energía para producir. La eficiencia energética, la producción limpia y sustentable se convierten en conceptos claves para enfrentar el futuro de las economías del mundo del siglo 21.

El proyecto que finalmente termina su tramitación, establece un plan revisable cada 5 años para impulsar metas de eficiencia energética.

Quedaban dos aspectos a definir y quiero reconocer el trabajo del gobierno y de la comisión mixta para resolverlo por unanimidad.

En primer lugar, promover el uso de medios de transporte limpios o cero contaminantes es una necesidad relevante, especialmente si consideramos el alto precio que tienen, actualmente los vehículos eléctricos. Permitir que las empresas puedan depreciar de manera acelerada sus vehículos eléctricos, híbridos o con cero emisiones es una oportunidad y un incentivo para que aquellas empresas que estén en condiciones de hacerlo puedan, al momento de renovar sus flotas, pensar en vehículos cero contaminantes como una alternativa más eficiente.

El acuerdo alcanzado logra legislar para, esperemos, los siguientes 20 años.

Respecto al segundo punto, el gobierno proponía una reducción del 1% de consumo energético. Meta que se consideró poco ambiciosa.

Me alegra que finalmente, se haya acordado que el plan debe considerar una reducción del 10% al 2030, respecto del 2019 de la intensidad energética. Además se deja establecido que en el plazo de 5 años los consumidores de gestión de energía deben reducir su intensidad energética en al menos 4%.

Voy a apoyar la propuesta de la comisión mixta, porque creo que cierra con un broche ambicioso y a la vez, realista un proyecto que busca poner a nuestro país a la altura del desafío de la adaptabilidad al nuevo paradigma que implica el cambio climático y los crecientes efectos que la acción humana tiene sobre el medio ambiente.

MINUTA INTERVENCION PROYECTO DE LEY FOGAPE REACTIVA

SEÑORA PRESIDENTA:

La pandemia del Covid ha durado bastante más de lo que en un momento pensamos. Las nuevas variantes del virus han aumentado su capacidad de contagio y nos enfrentamos a diario, a los efectos nefastos que ha tenido sobre la economía.

La mayoría de las PYMES se han visto seriamente afectadas y la capacidad de sobrevivir depende de su acceso al crédito para poder sostenerse mientras podemos visibilizar los esquivos brotes verdes.

El FOGAPE se planteó como la alternativa para garantizar créditos con determinadas características y por ello, en el primer semestre se creó el FOGAPE COVID para colaborar con las empresas necesitadas de créditos.

El nuevo proyecto ya no solo apunta a la supervivencia de la empresa, sino que a la reactivación. Se ha escuchado a los distintos actores y se busca permitir ampliar el abanico de opciones, plazos y características.

Uno de los problemas detectados es que, por el riesgo de ciertas empresas, la tasa de interés fija máxima no alcanzaba a cubrir lo que las instituciones financieras consideraban rentable. El aumento de la tasa de interés máxima permite llegar a empresas que hasta hoy se han visto marginadas.

Mark Twain decía que los bancos son esas personas que te prestan paraguas cuando hay sol, pero te lo quitan cuando empieza a llover...lamentablemente, tienen aversión al rieago y una tasa de interés muy baja dejaría a demasiadas Pymes sin acceso al crédito que tanto necesitan

Es relevante considerar también, que dada la extensión de la crisis sanitaria, hay muchas empresas que no van a poder pagar, sin importar cuantos meses de gracia se le hayan dado; por lo que es de la mayor relevancia que se permita usar el nuevo Fondo COVID -Reactiva para el pago de esas cuotas.

Hasta ahora, solo se ha usado 1/3 de los fondos disponibles y es razonable que se pase de una etapa de supervivencia a una fase de Reactivación, para sostener la producción, el crecimiento y, principalmente, el empleo.

La región de los Lagos, fuertemente castigada por el virus con cifras de contagiados que no ceden y con daños relevantes en su industria gastronómica y turística, ve con esperanza la

posibilidad que pueda haber condiciones especiales para las pymes más afectadas por una crisis que ha llegado a niveles que nunca consideramos posibles.

El nuevo FOGAPE Reactiva es necesario ya...con mejores condiciones, mejores plazos y menores restricciones de acceso. Es cierto, no es un aporte directo, es una garantía estatal a un crédito; pero en las actuales condiciones es una ayuda necesaria y urgente que constituye un salvavidas para miles de emprendedores que ven como sus sueños y empeños de años son consumidos por una pandemia de alcance mundial y de duración aún por determinar, hasta que se logre vacunar a un porcentaje muy importante de la población de nuestro país.

Por todo lo anterior, apruebo el proyecto.

He dicho, señora Presidenta.

MINUTA INTERVENCION ENFERMOS TERMINALES (20/01)

Señora presidenta:

La muerte es la única certeza que tenemos durante nuestras vidas, un plazo que a todos nos llega, aunque los cristianos creamos en una vida después de la muerte. Y por lo mismo, no podemos tratar de forma igual a situaciones diferentes.

Muchas veces se ha planteado el tema de la excepcionalidad de los recursos para personas con enfermedades graves e irreversibles. Si ya una enfermedad grave es motivo de dolor y sufrimiento para la familia y los seres queridos; es también motivo de gastos extraordinarios. De que sirve tener ahorros si no los vamos a poder usar?

El gobierno del presidente Piñera ya había manifestado hace un año la voluntad de regular estas situaciones excepcionales, de modo tal de poder colaborar con recursos que provienen de los ahorros de los propios afiliados ya sea activos o pasivos.

El permitir que se disponga de un monto de libre disposición, en caso de existir fondos, es una ayuda que vendrá en alivio de los miles de gastos que significa una enfermedad que, en muchos casos, no solo termina con la vida, sino que de a poco, acaba siendo un sufrimiento aun mayor para la familia de la persona con la enfermedad.

Me parece de toda lógica, que el retiro de fondos esté libre de impuestos, al menos hasta un monto que llega a los 40 millones.

Solo me preocupa el tiempo que va a demorar el Consejo médico; en principio se señala un plazo de 5 días hábiles, pero ya sabemos por experiencias previas, especialmente con el COMPIN, que esos plazos muchas veces no se cumplen. Yo espero, que se pongan todos los recursos necesarios para que los Consejos médicos no se transformen en un cuello de botella que hagan de esta tramitación otra causa de sufrimiento más.

La política se engrandece cuando nos une; cuando nos recuerda que somos pasajeros todos en el mismo tren que llamamos vida y que los problemas de uno, pueden ser de todos. Hoy es uno de aquellos días en que la política se reivindica y pone en tabla los temas urgentes y que además son importantes.

Por lo mismo, apruebo este proyecto.

He dicho, señora presidenta.

MINUTA DE INTERVENCIÓN PROYECTO QUE REGULA PLATAFORMAS DIGITALES

DISCUSION EN GENERAL Y PARTICULAR

SEÑORA PRESIDENTA:

La pandemia que afecta a Chile y al mundo ha traído consecuencias nefastas a todo nivel; pero también ha permitido hacer patente realidades que permanecían ajenas a la mayoría de los chilenos; pero que también han representado una oportunidad de tener ingresos en estos días oscuros, dadas las restricciones de desplazamiento.

Por cierto, los repartidores o conductores de plataformas no son un fenómeno que nace con la pandemia, sino que han estado presente hace ya algunos años, pero en la más absoluta informalidad desprovistos de los derechos que otorga el Código del Trabajo y sin la capacidad de negociación que supone un contrato de honorarios.

Por eso, es relevante que se haya acometido la difícil labor de buscar una regulación que pueda ser útil, sin ser una cortapisas que impida a estas plataformas funcionar: La solución planteada en el proyecto es una respuesta eclectica que deberá atender al caso a caso.

El establecimiento de dos categorías es una respuesta hibrida a un problema fáctico: Dependientes o independientes, según haya o no alguno de los elementos del artículo 7 del Código del Trabajo que indican la presencia de una relación laboral: esto es el vinculo de dependencia y subordinación. Un problema que deberá resolverse caso a caso, usando los elementos de juicio que el propio proyecto establece.

Me llama la atención y debo manifestar mi preocupación por la incorporación de características típicas de la relación laboral como elementos comunes para ambos tipos de relaciones contractuales: La obligación de entregar diariamente elementos de protección personal a costa del empleador; la aplicación del régimen de tutela laboral en ciertos casos o la posibilidad de sindicalizarse aun cuando no exista relación laboral. Es verdad que el proyecto establece que en estos casos, tales circunstancias no constituyen ni pueden servir de presunción para establecer una relación laboral, pero no deja de ser ajeno a los principios del derecho laboral clásico y puede constituir una fuente de conflictos interpretativos, dado el principio de **Indubio pro operario** que rige nuestro ordenamiento.

Con todo, el propio proyecto reconoce que es difícil establecer una regulación que satisfaga a todas las partes, dado que es motivo de discusión y solucionado de diversas maneras en otros lugares del mundo.

El proyecto mejora las condiciones de trabajo de las personas que operan en estas plataformas, fija un honorario o sueldo mínimo en relación a las horas trabajadas, otorga certezas y derechos básicos, además de mejorar sustancialmente las medidas de protección en que se deben desarrollar estas funciones.

No es la solución perfecta, es un avance, que por cierto se valora y apoyamos; pero que requiere mejoras y la solución de problemas que no tienen fácil respuesta .

He dicho, señora presidenta

PARA COMUNICADO DE PRENSA

El proyecto de Ley en primer trámite constitucional busca sancionar con más dureza a aquellos adultos que cometen delitos en concierto con menores o que fuerce, instigue o se engañe a un menor para cometer un delito. Para ellos modifica el art. 72 del Código penal. La norma actual se encuentra superada y se busca, mediante esta modificación, regular dos casos: Que el adulto participe en acuerdo con menores o que se utilice a menores mediante engaños, amenazas o incitación a cometer un delito.

El proyecto propone que al actuar en concierto con menores, al adulto no se le puede otorgar el rango más bajo de la pena (subiendo el mínimo de la sanción) y se aumenta la pena para aquellos adultos que se valgan de menores mediante engaño, incitación o amenaza. Se ordena al juez tener especial consideración cuando se ha usado a menores de 14 años

Me alegro que finalmente, estemos discutiendo materias de seguridad ciudadana. La encuesta Cadem de esta semana puso este tema entre los 3 más relevantes para la ciudadanía. Aquí hay que derribar mitos, Basta ya de asociar delincuencia con pobreza, los delincuentes pueden ser ricos o pobres; pero las víctimas de la delincuencia suelen ser quienes menos tienen y donde menos llega el Estado.

En medio de la pandemia, o quizás a causa de la pandemia, los temas de seguridad ciudadana habían pasado a segundo plano, después de haber estado en el centro del debate por los graves hechos de violencia ocurridos desde el 18 de octubre de 2019.

Pero la realidad es que estos temas vuelven porque son relevantes para la inmensa mayoría de los chilenos que ven como la delincuencia tiende a ocupar los espacios que Carabineros y la PDI han debido dejar para encargarse de las labores de fiscalización por el COVID.

Desde siempre, la delincuencia ha usado a menores para cometer sus delitos aprovechando que los menores de 18 años son inimputables en nuestro sistema penal. Pero este fenómeno se ha visto agudizado en el último tiempo donde bandas organizadas usan concertadamente a menores para delitos de mayor gravedad y connotación social.

El proyecto es una clara manifestación en el sentido correcto y me alegro haya tenido alto respaldo en la Comisión. El consejo de los expertos que asistieron era claro: había que distinguir entre quienes participan en la comisión de delitos con menores y aquellos que usan con amenazas o inducen a menores a cometer un crimen y creo la comisión resolvió de buena manera el tema para evitar malas interpretaciones o dobles sanciones.

Me quedan dudas respecto a que significa que el juez “deberá tener debida consideración” cuando el menor involucrado tenga menos de 14 años, por la falta de definición y ya sabemos que la ambigüedad favorece a los delincuentes profesionales que suelen conocer el sistema penal mejor que muchos abogados.

También me preocupa que pasa cuando el adulto involucrado sea un joven de 18 o 19 años y el menor tenga 16 o 17 años, puesto que en esos casos, la inducción o el grado de responsabilidad penal no puede quedar entregado solo al calendario.

De todas maneras, creo que el proyecto es un avance porque pone un piso, eleva las penas distinguiendo entre situaciones distintas y declara expresamente que la voluntad del menor de edad en cuanto a su involucramiento voluntario no influye en la pena del adulto.

Debemos ser firmes y categóricos en defender a nuestros niños, niñas y adolescentes y darles la protección necesaria, sancionando fuertemente a los adultos que se aprovechan de la inexperiencia o sus necesidades, o simplemente buscan sacarle partido mañosamente a la Ley de responsabilidad penal adolescente.

Por lo mismo, apruebo este proyecto

He dicho, señora presidenta.

Minuta de Sala

**PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA Y FORTALECE LA LEY N° 20.609, QUE ESTABLECE MEDIDAS
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
(12.748-17)**

Origen del proyecto de ley	Moción Parlamentaria Senadores señora Adriana Muñoz, Álvaro Elizalde, Alejandro Guillier, José Miguel Insulza y Juan Ignacio Latorre.
Trámite constitucional	Primer Trámite Constitucional – en Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
Urgencia del Proyecto de Ley	Sin Urgencia
Recomendación de voto	Abstención

I. Ideas matrices del Proyecto de Ley. (Minuta de gobierno)

1. Afirma que, a siete años de la entrada en vigor de la ley, ésta ha mostrado poca efectividad para erradicar actos y omisiones de discriminación arbitraria.
2. El objetivo del proyecto de ley es «introducir modificaciones a la Ley N ° 20.609 tendientes a fortalecer la prevención de la discriminación, y promover y garantizar de mejor manera el principio de igualdad, dotando de mayor eficacia a la acción de no discriminación arbitraria que consagra la ley.
3. Las modificaciones propuestas buscan lo siguiente:
 - a) Modificar el propósito de la ley agregando la función de prevenir la discriminación arbitraria, y promover y garantizar el principio de igualdad, sumando estos al mecanismo judicial ya instaurado por la ley.
 - b) Mejorar la definición de discriminación arbitraria y la referencia a las categorías sospechosas ajustándolas a lo establecido en los tratados internacionales. Para ello, la moción propuso modificar el concepto legal de discriminación arbitraria, incorporando los siguientes ajustes:
 - Agregando la categoría «preferencia»;
 - Establecer a la discriminación arbitraria como una ofensa autónoma sin requerir adicionalmente la vulneración del ejercicio de otros derechos consagrados en la constitución.

- Reemplazar la frase «en particular» por la frase «en especial», para salvar ambigüedades.
 - Agregar la frase «cualquier otra condición social» en las categorías sospechosas, en los mismos términos que la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- c) Suprimir la excepción al principio de no discriminación establecido en el inciso final del artículo segundo, que, según indica la moción, establece una consideración de razonabilidad *a priori* de las distinciones, exclusiones, preferencias o restricciones que, no obstante haberse basados en las categorías sospechosas que establece la ley, se amparan en el ejercicio de otro derecho constitucional.
- d) Inversión de la carga de la prueba aportando indicios suficientes de la existencia de una acción u omisión de discriminación arbitraria, incorporando un nuevo artículo 10, que emule el contenido del artículo 493 del Código del Trabajo.
- e) Aumento del monto máximo de la multa que puede fijar el juez contra las personas que han cometido actos u omisiones de discriminación arbitraria.
- f) Suprimir la sanción contra el recurrente que es vencido en juicio, dado que en la actualidad se ha constituido como un factor inhibitorio para las personas que son objeto de discriminación arbitraria al temer verse condenados a una sanción si accionan judicialmente.

II. Opinión del Ministerio de Justicia

El proyecto de ley es una oportunidad para ajustar la actual legislación nacional que promueve medidas contra la discriminación arbitraria a los estándares internacionales de derechos humanos. Sin embargo, algunas indicaciones jurídicamente relevantes para el Ejecutivo fueron rechazadas y se aprobaron indicaciones parlamentarias que podrían significar una aplicación problemática.

1.- Consideraciones jurídicas relevantes

- a) Se reestructura el procedimiento en que se conoce y tramita la acción de no discriminación, el cual se adecua a las reglas que rigen la tramitación ante los juzgados de letras, superando la estructura actual que sigue los procedimientos utilizados por las Cortes de Apelaciones al conocer de acciones de protección.
- b) Por insistencia de senadores de oposición, se ocupa un lenguaje más cercano a la ciudadanía, aunque menos técnico; se regulan audiencias de contestación, conciliación y prueba, y de rendición de prueba, a fin de resguardar adecuadamente la bilateralidad de la audiencia, el contradictorio y demás garantías inherentes al debido proceso, cambiando el rol del denunciado

a demandado propiamente tal, otorgándole garantías procesales y un rol activo en el procedimiento

c) Se incorpora la acción indemnizatoria dentro de la discusión de la acción de no discriminación.

2. ASPECTOS CONTROVERSIALES (EN OPINION SENADOR MOREIRA)

a) En relación con el artículo 2º y la modificación de la conjunción, que antes, luego del sustantivo «particulares» era «y» y ahora pasó a ser «o», pasa de tener requisitos copulativos a crear una categoría autónoma; quedando en rigor, dos hipótesis autónomas y equivalentes.

Sería prudente conservar el carácter copulativo actualmente vigente en la Ley N ° 20.609 entre la distinción, exclusión o restricción y la privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo del derecho, por cuanto no son hipótesis autónomas y equivalentes.

b) Se incorpora un nuevo inciso final en el artículo 2º por el cual se prohíben expresamente las terapias de conversión. Lo anterior va en contra de la libertad y autonomía de los adultos para disponer someterse a una terapia, que considera necesaria y que de ser efectiva, le significaría una mejora en su perspectiva de vida y futuro.

Aún más, la norma es tan estricta que se corre el riesgo que constituyan discriminación arbitraria aquellas intervenciones médicas que las personas requieran en el contexto del reconocimiento de la identidad y expresión de género.

Lo anterior, considerando que en la Ley N ° 21.120, se reconoce que la manifestación de la expresión de género puede incluir modos de hablar o vestir, modificaciones corporales, o formas de comportamiento e interacción social, entre otros aspectos.

c) El proyecto otorga legitimación activa no sólo a la víctima o sus representantes legales, sino que en ciertos casos, como discriminación generalizada o que afecte a sujetos múltiples, también permite a personas jurídicas sin fines de lucro la titularidad de la acción. Ello autorizaría a estas organizaciones no solo demandar por discriminación arbitraria, sino que también por indemnización de perjuicios; lo que podría constituir un incentivo perverso para estimular la litigación temeraria, en busca de eventuales indemnizaciones.

Se establece que en caso que el recurrente aporte antecedentes que el juez estime como “indicios suficientes” que se ha producido una acción u omisión que signifique discriminación arbitraria, corresponde al denunciado explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y su racionalidad; es decir, instaura los “indicios” como regla probatoria en el procedimiento civil, lo que atenta contra los principios del proceso civil, afectando la igualdad de las partes y el debido proceso.

Se señala en el proyecto la dificultad probatoria que tienen las víctimas para acreditar la discriminación; pero la facilidad probatoria no puede implicar un desbalance en la igualdad de las partes ante el juez que conoce la causa: La norma está diseñada para un procedimiento totalmente diferente, como es el laboral, regido por principios distintos a los que inspiran los

procedimientos civiles, tales como la concentración, la mediación probatoria y la oralidad, toda vez que en dicha sede aplica el principio *indubio pro operario* y reglas a favor del trabajador, inherentes a la desigualdad de la posición contractual entre trabajador y empleador. En cambio, en sede civil opera plenamente la igualdad de partes no encontrándose mayores fundamentos jurídicos para conceder prerrogativas *ex ante ex ante* y a todo evento a una parte por sobre la otra; al contrario, en sede civil, son excepcionales y específicas tales como las presunciones, y que pueden desvirtuarse en el caso concreto. Por lo mismo, los presupuestos que hacen admisible el uso de indicios en el procedimiento laboral no son procedentes en un procedimiento civil.

d) No sólo se faculta al juez para fallar basado en la sana crítica, sino, que en algunos casos calificados (que el proyecto no define) permite sentenciar **“según la impresión que le haya merecido la conducta de las partes durante el juicio y la buena o mala fe con que hayan litigado en él.”**

En otros términos, se habilitaría al juez a fallar por su impresión subjetiva de las partes u otras razones ajenas al proceso judicial.

e) En relación con el artículo 12 y la regla de otorgamiento de un monto mínimo de indemnización, el texto aprobado permite al juez ordenar el pago de una indemnización de perjuicios con un monto mínimo de 40 UTM. (\$2.000.000 aprox). La determinación de un monto mínimo no se justifica, ya que el monto mínimo debe depender de los antecedentes que se acompañen en el proceso y no corresponde que se determine de manera anterior un piso carente de fundamento

f) Aumenta el techo de la multa de 50 a 500 UTM. El monto de la multa a beneficio fiscal es desproporcionado y afecta directamente a personas de bajos ingresos, que podrían ser sujeto de esta acción como los miembros de comunidades cristianas e iglesias evangélicas, que no tendrían forma de pagar los montos que aprueban en el proyecto.

g) Suprime la excepción al principio de no discriminación establecido en el inciso final del artículo segundo, que, establece una consideración de razonabilidad *a priori* de las distinciones, exclusiones, preferencias o restricciones que, no obstante haberse basados en las categorías sospechosas que establece la ley, se amparan en el ejercicio de otro derecho constitucional. El texto vigente señala lo siguiente:

“Se considerarán razonables las distinciones, exclusiones o restricciones que, no obstante fundarse en alguno de los criterios mencionados en el inciso primero, se encuentren justificadas en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental, en especial los referidos en los números 4º, 6º, 11º, 12º, 15º, 16º y 21º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, o en otra causa constitucionalmente legítima.”

Si bien el gobierno aprueba la eliminación, se debe tener en cuenta que esto deja sin una poderosa herramienta de defensa a todos los grupos religiosos o defensores de la familia tradicional

h) En el artículo segundo se amplían los casos de discriminación arbitraria no solo aquellos que tengan por objetivo discriminar, sino que también aquellos casos en que el resultado de lugar a discriminación.

i) Se crea un artículo segundo bis, que define la discriminación directa, la indirecta, múltiple o agravada y la estructural. La incorporación de todas estas categorías amplían el abanico de una manera desproporcionada, incluyendo categorías no conocidas en la legislación nacional y que abren la posibilidad de demandas colectivas o por personas jurídicas sin fines de lucro, incluso contra el Estado de Chile por conductas que pueden ser tradicionales, sin que exista intención alguna de discriminar.

j) Se elimina el tercer inciso del artículo 12 que sanciona con multa fiscal de 2 a 20 UTM al actor cuando se establece que la denuncia carece de todo fundamento. Las causas de discriminación son sensibles, afectan la imagen y la reputación del demandado, además de ser víctima de las llamadas “funas”, aun cuando no haya sentencia condenatoria. Por lo mismo es relevante mantener esta norma que sanciona al litigante temerario más allá de la condena en costas. Se debe destacar que esta multa solo aplica cuando la sentencia señala expresamente que la denuncia carece de todo fundamento. Por lo anterior, si no hay condena en costas, tampoco cabe esta multa.

CONCLUSIÓN: El proyecto busca mejorar el acceso de las víctimas de discriminación arbitraria a un procedimiento rápido, claro; aumentando las categorías sospechosas y permitiendo pedir indemnizaciones, sin tener que proceder a otro juicio posterior, como ocurre en la actualidad.

En el transcurso de la tramitación en la Comisión, el proyecto amplió su ámbito a uno más complejo, donde se presume que la supuesta en una posición de desventaja evidente, asimilándolo a una relación laboral. El uso de “indicios probatorios”, el aumento desproporcionado de las multas, la eliminación de la multa al litigante temerario, así como que la sentencia no solo tenga que basarse en la sana crítica, sino que incluso puede sentenciar basado “En la impresión que causó en el tribunal las partes” son manifestaciones de este argumento.

El procedimiento civil presume la existencia de partes iguales, si bien es dable pensar que la víctima de discriminación arbitraria pueda tener dificultad para acreditar sus dichos; la asimilación del procedimiento en algunas de sus etapas al procedimiento laboral es desconocer la naturaleza del procedimiento civil.

El aumento de las categorías sospechosas así como la incorporación de nuevos grupos de discriminación como la indirecta, colectiva o estructural, así como la posibilidad que, en

determinados casos se amplíe la legitimación activa son aspectos que deben ser revisados con mucha mayor detención.

Por todo lo anterior; y aunque el proyecto se vota solo en general, según recomienda el Informe de la comisión respectiva; la propuesta es abstenerse.

(Minuta redactada en base a Minuta de la Subsecretaria de DDHH y notas del equipo del Senador Moreira)

MOREIRA